

SEGUNDO ESTUDIO

POLÍTICA Y DERECHO DEL PETRÓLEO BAJO EL PRIMER GOBIERNO PERONISTA (1946-1955)

CAPÍTULO I Naturaleza del gobierno peronista	155
1. La década infame	155
2. De la dictadura militar al bonapartismo populista	160
3. Represión, burocratismo e ineficiencia	165
4. El gigante con pies de barro	167

SEGUNDO ESTUDIO:

**POLÍTICA Y DERECHO DEL PETRÓLEO
BAJO EL PRIMER GOBIERNO
PERONISTA (1946-1955)**

CAPÍTULO I

NATURALEZA DEL GOBIERNO PERONISTA

El telón del drama histórico encarnado y representado por el peronismo se levanta el 4 de junio de 1943. El escenario y los protagonistas, sin embargo, se han ido preparando desde muchos años antes.

1 "LA DÉCADA INFAME"

En la década de los años 1930, Argentina presenta el esquema estructural de un país dependiente y semidesarrollado, aunque no en grado tan acentuado como otros países latinoamericanos. Este esquema, además, se ha ido modificando parcialmente por el impacto de procesos producidos en el plano internacional y en el plano interno.

Desde mediados del siglo XIX, una oligarquía terrateniente y mercantil, en estrecha alianza con los intereses británicos y europeos, detenta el control de los recursos y resortes básicos de la economía, el prestigio, la cultura, el poder político. La oligarquía agroexportadora y el capital extranjero, a través de la producción primaria, el comercio exterior y las inversiones extranjeras, han conferido a la economía argentina sus características de subordinación y especialización deformante. Argentina se vuelve en definitiva un país productor de materias primas agropecuarias, mercado para la industria metropolitana, zona altamente lucrativa para la inversión de capitales. El poder económico y social es reforzado por el control de los instrumentos culturales e ideológicos, y sobre todo de los resortes del Estado. Tras un interludio de gobiernos radicales de clases medias (1916-1930), la revolución militar del general José Uriburu restablece en 1930 el gobierno de tipo oligárquico, en que una minoría privilegiada se mantiene en el poder por una combinación de fraude electoral, corrupción, y violencia desnuda a cargo del ejército y la policía. Así se inaugura lo que el consenso popular denominaría como la "década infame", de la historia argentina en el siglo XX.

El control oligárquico sobre el Estado y sobre la política económica opera inicialmente, desde 1930, como mera reacción contra la crisis

mundial de 1929, y en defensa de la estructura socioeconómica tradicional y de los intereses de los grupos nacionales dominantes y de las inversiones extranjeras. Tal política se ve, sin embargo, refractada y modificada, en sus intenciones y en sus resultados, por un proceso nacional e internacional que ningún grupo aislado puede prever y controlar, produciéndose así efectos no pensados ni deseados.

A partir de la crisis de 1929, el sistema multilateral de comercio y de pagos se quiebra. La demanda externa de productos agropecuarios, sus precios y su producción, se debilitan y caen, y más tarde se restablecen lentamente. El flujo de capitales extranjeros se retrae primero y luego apenas se recupera. En general, se debilitan los factores tradicionales de crecimiento económico en superficie, por estímulos externos y acción puramente privada. A ello se agrega una intensificación de la lucha entre los intereses y los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos por el control del mercado interno y de la política económica de Argentina.

En reacción ante este cúmulo de nuevos problemas, el gobierno conservador intensifica el intervencionismo del Estado. Reestructura y moderniza la maquinaria administrativa. Utiliza estos resortes para cumplir una política económica en defensa de los precios, rentas y ganancias de la oligarquía terrateniente-exportadora, y para obtener mayores ingresos fiscales que la crisis ha reducido. El gobierno oligárquico instituye la compra de cosechas por el Estado, el control de cambios, el refuerzo del proteccionismo aduanero. Para preservar el mercado tradicional de carnes, acepta las exigencias británicas de trato preferencial para las empresas de ese origen (Tratado Roca-Runciman, 1933), lo que acentúa más aún la influencia de aquéllas sobre la economía y la política argentina. Al mismo tiempo, sin embargo, los gobiernos conservadores buscan independizar algo más a la economía argentina de tales presiones y de las vicisitudes del mercado mundial, estimulando tímidamente el desarrollo de la incipiente industria.

Simultáneamente, en efecto, se ha ido desarrollando una nueva fase de industrialización y urbanización. El crecimiento manufacturero es favorecido por la crisis externa (caída de exportaciones que impide seguir importando bienes industriales); por el proteccionismo aduanero y el control de cambios; por el sostén estatal de la capacidad adquisitiva del mercado interno (obras públicas, compra de cosechas, incremento de la ocupación en la maquinaria gubernamental expandida por el intervencionismo); por el aflujo de capitales extranjeros, ahuyentados de Europa por la crisis y el peligro de guerra, o prove-

nientes de Estados Unidos; y por la oferta de mano de obra abundante y barata. La crisis agraria expele masas campesinas arruinadas del interior rural hacia Buenos Aires, las que engrosan las filas de la población urbana y del proletariado industrial, y amplían el mercado urbano de consumo.

Emergen y se consolidan así nuevos grupos sociales con impulso ascensional: clases medias (empresariales, profesionales, burocráticas), proletariado industrial, masas marginales de reciente e incompleta incorporación al mundo urbano. Se multiplican e intensifican las necesidades y demandas no satisfechas por las estructuras tradicionales. Se esbozan una mentalidad y un clima colectivo, de tipo nacionalista y desarrollista. Surge una conciencia difusa sobre los inconvenientes de una economía unilateral, subordinada y sin defensa ante las fluctuaciones internacionales. Se va proclamando la necesidad de una economía más autónoma y diversificada, y de una revalorización de los factores internos de crecimiento, hasta entonces subestimados: el ahorro y la inversión nacionales, de tipo público y privado, el mercado interno, el Estado. Los grupos medios y populares presionan en favor de un mayor grado de reconocimiento y de participación en el ingreso nacional, las decisiones básicas, la distribución y el ejercicio del poder político. El esquema del sistema político comienza a ser replanteado. Las tensiones y conflictos de tipo interno se combinan y refuerzan por el impacto del proceso internacional.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial, por una parte favorece los procesos de industrialización y urbanización. El mercado exterior para la producción agropecuaria exportable se expande con la demanda bélica, el mayor intervencionismo estatal (compras del gobierno), la estabilización e incremento de los precios. La favorable balanza comercial y de pagos permite aumentar la capacidad adquisitiva del mercado interno, en favor de la actividad industrial. Ésta se ve asimismo estimulada por la falta de competencia por parte de los países en guerra, el ingreso de capital extranjero (europeo y norteamericano), la plena ocupación con niveles de bajos salarios, la posibilidad efectiva de altas tasas de ganancia.

Por otra parte, la guerra mundial replantea las condiciones de inserción de Argentina en el sistema internacional. A la lucha entre los dos grandes bloques militares, cuyo resultado es todavía harto incierto hacia 1943, se agrega la agudización de la competencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Un sector de la oligarquía quiere mantener a todo precio la neutralidad, como medio de impedir la expansión

de Estados Unidos en el país, y de favorecer a Gran Bretaña, abasteciendo su esfuerzo de guerra a precios fijos, a crédito y sin intereses. El neutralismo es favorecido asimismo por grupos progermánicos, especialmente en las fuerzas armadas. Otro sector oligárquico, vinculado a la industrialización, considera que Gran Bretaña agotó ya sus posibilidades como metrópoli, y que el aporte de capitales y ayuda de Estados Unidos es indispensable para el progreso de las actividades manufactureras. La clase dirigente se escinde entre grupos progermánicos, probritánicos y pronorteamericanos.

Este proceso de transición de una a otra y muy diferente fase de crecimiento y cambio no es consecuencia de la acción deliberada de una clase, grupo o élite. Ningún sector social en particular promueve conscientemente los cambios, los aprovecha de modo sistemático, o tiene incluso clara idea de los que ocurren y de sus implicaciones. Los cambios indicados se producen sobre todo por efecto de factores accidentales, impersonales, externos a la Argentina, y a sus centros de decisión (crisis económicas y bélicas, modificación de la relación de fuerzas entre las grandes potencias), o bien como subproductos de medidas tomadas en favor de los grupos de intereses tradicionales.

La oligarquía se ha venido debilitando y modificando bajo el impacto de las transformaciones indicadas (crisis mundial, lucha entre grandes potencias, emergencia y presión de nuevos grupos sociales). Su gestión política encuentra sus límites en la propia naturaleza aristocratizante del régimen, y en la consiguiente incapacidad para promover el desarrollo y la modernización, y para incorporar e integrar al sistema, de modo más o menos amplio y satisfactorio, a las nuevas clases medias, al proletariado industrial y a las masas marginales. La combinación de violencia desnuda, fraude electoral, corrupción general revelada en negociados escandalosos, e ineficiencia creciente, contribuye a reducir al mínimo posible la base política y la justificación del régimen oligárquico. La oligarquía se debilita, pierde confianza en sí misma, se escinde y reagrupa en sectores divergentes, perdura solamente en la medida en que las fuerzas armadas no le retiran su apoyo.

Los problemas del país tampoco pueden ser resueltos por la nueva burguesía industrial. Ésta aparece y se desarrolla tardíamente, limitada por las estructuras socioeconómicas y políticas tradicionales y por el predominio casi intacto de los grupos de poder vinculados a las mismas. Surge y vive a la sombra de o en ensamblamiento con grupos terratenientes, mercantiles y financieros, tanto nacionales como extranjeros,

con los cuales tiende a identificarse, perdiendo autonomía, y capacidad innovadora. A ello contribuye también el temor a la rápida emergencia de un nuevo proletariado industrial, masivamente concentrado en Buenos Aires y sus suburbios, y en algunos otros centros urbanos del interior.

Este nuevo proletariado va aumentando su peso específico y su capacidad de presión se perfila como amenaza potencial al orden establecido, pero hacia 1943 no puede aportar soluciones propias que sean operativas de modo inmediato. Todavía en proceso de estructuración, absorbido por la adaptación a las nuevas condiciones de la metrópoli industrial y de la sociedad de masas, la clase trabajadora carece de conciencia clasista, de tradiciones sindicales y políticas, de métodos de acción y organización eficaces para pretender influencia o derecho de conducción en el proceso argentino. Los partidos de izquierda, el Socialista y el Comunista, se han convertido en élites intelectualizadas y burocráticas, que despliegan ante las masas obreras y populares una actitud de paternalismo distante, y se hallan demasiado absorbidas por las preocupaciones de la política internacional, de la manipulación parlamentaria y de las tácticas del poder personal en los sindicatos, como para preocuparse por la captación, la educación y la organización de los nuevos estratos industriales y urbanos. Éstos quedan librados a su destino y a sus propias fuerzas, disponibles para el primer manipulador diestro que aparezca en escena.

En general, el agotamiento o la inmadurez de los diversos grupos sociales nacionales ante el viraje histórico que se perfila desde la crisis de 1929 hasta la Segunda Guerra Mundial, se manifiestan en la caducidad e inoperancia de los partidos políticos tradicionales, desde la derecha oligárquica esclerosada, pasando por las clases medias, hasta una izquierda envejecida y de espaldas al país.

Las tareas de reajuste internacional, crecimiento económico y creación de un nuevo equilibrio social y político que la oligarquía y la burguesía industrial —y las capas medias— y sus partidos políticos, demuestran ser incapaces de cumplir, terminan por ser asumidas por el Estado, y en especial por su sector más concentrado, ejecutivo y politizado: las fuerzas armadas. Éstas, que durante toda la “década infame” iniciada en 1943, habían terminado por ser mero y único sostén armado del régimen oligárquico, deciden finalmente asumir por derecho propio y en plenitud un poder que hasta entonces ejercieron de manera oculta, limitada y en beneficio de otros. El 4 de

junio de 1943, un golpe militar derriba al presidente Ramón Castillo, e instaura una dictadura que desembocará en un experimento político no previsto por los líderes iniciales del movimiento. El telón se alza sobre el drama. El coronel Juan Domingo Perón no tardará en entrar en escena.

2. DE LA DICTADURA MILITAR AL BONAPARTISMO POPULISTA

El golpe del 4 de junio de 1943, y el gobierno que surge del mismo, tienen inicialmente un sentido puramente militar, de reafirmación del poder de casta, con una inspiración ideológica de tipo nazi-fascista. El primer apoyo civil está proporcionado por elementos de orientación clerical y falangista, cuyos excesos y torpezas aíslan rápidamente al gobierno civil y producen las primeras manifestaciones de oposición organizada. La resistencia a la dictadura militar va agrupando, por motivos y con grados variables, a la oligarquía conservadora desplazada, al gran empresariado industrial ligado con aquéllas y con intereses norteamericanos, a la clase media intelectual (especialmente los profesores y estudiantes universitarios), a los partidos políticos privados de legalidad, y a los Estados Unidos que miran con desconfianza la neutralidad y las simpatías progermánicas del nuevo régimen.

La constatación del aislamiento a que se ve reducida la dictadura, y la elaboración y cumplimiento de una estrategia que proporcione amplia base política a aquélla, son obra del coronel Juan D. Perón. Soldado profesional, identificado profundamente con las pautas básicas de la institución militar, pero dotado de talento para evaluar fría y realistamente las fuerzas en juego y los factores de poder político; personalidad autoritaria y ambiciosa, con condiciones excepcionales para la conducción y la organización, Perón no es un recién llegado a la acción. Ha participado activamente en la preparación del golpe militar de 1930. Ha estudiado de cerca los métodos y organismos del fascismo italiano. Tiene intervención directa en la actividad conspirativa que desemboca en el golpe del 4 de junio de 1943, y luego en la organización y funcionamiento de una logia, el GOU (Grupo Obra de Unificación, o Grupo Oficiales Unidos), que pretende regir el proceso revolucionario y la dictadura militar. El 2 de diciembre de 1943, se hace cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, base de lanzamiento de toda su estrategia política. La misma consistirá básicamente en utilizar como instrumentos el apoyo de las fuerzas armadas,

de la Iglesia, de la policía y la burocracia gubernamental, y la simpatía de los inversores y del gobierno de Gran Bretaña, para lograr la adhesión masiva de los obreros industriales y, en general, de las masas pobres de la ciudad y del campo. La posibilidad de esta captación está dada por el control del Estado: la afluencia de recursos financieros; el aumento en número y en potencial dinámico de los sectores trabajadores y populares, y su carencia de experiencia sindical y política, de ideología propia y de dirección independiente y eficaz; por el número e intensidad de las necesidades materiales y psicológicas a satisfacer. Estas condiciones predisponen a estas masas al conformismo, la apatía, y la aceptación de un paternalismo gubernamental que dispense beneficios desde las cimas del poder.

Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la que pronto agrega la función de vicepresidente de la República, el coronel Perón se lanza a la captación y organización de los sectores trabajadores de la ciudad y del campo, como premisa para su canalización y su manipulación política. Las viejas burocracias sindicales, de orientación socialista y comunista, son desplazadas por la represión y/o el soborno. En su lugar surge un nuevo sindicalismo de masas, dependiente del Estado, a través del otorgamiento de la legalidad gremial y de concesiones materiales y profesionales (mejoras de salarios y de condiciones de trabajo, arbitraje estatal favorable en los conflictos laborales, protección a dirigentes y delegados frente a la prepotencia patronal). El nuevo edificio sindical es coronado por la Confederación General del Trabajo, única que, como los sindicatos de base y las federaciones, es controlada por una nueva promoción de dirigentes caracterizados por el arribismo, la incondicionalidad y el burocratismo.

La política obrerista es complementada y justificada por un juego de equilibrio respecto a los grandes empresarios, a los cuales dicha política es presentada como garantía de control de las masas trabajadoras, orden y paz social, y posibilidad de apoyo estatal a las actividades industriales y comerciales de las grandes corporaciones de capital nacional y extranjero.

Un primer enfrentamiento decisivo de fuerzas entre el peronismo en ascenso y la oposición, se produce en octubre de 1945. Un golpe de fuerza, encabezado por oficiales de la marina y del ejército y apoyado abiertamente por el embajador norteamericano Spruille Braden, derroca a Perón. Su equipo político, en el que ya descuella su esposa, Eva Perón, monta una movilización de masas trabajadoras, promovida y controlada por la policía, la burocracia gubernamental

y la nueva dirección sindical, en un despliegue sin precedentes que derrota la contraofensiva opositora y fuerza el regreso de Perón a sus funciones anteriores.

El segundo y decisivo enfrentamiento se produce en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946. Por una parte, la "Unión Democrática" agrupa a los partidos políticos tradicionales, a los grupos oligárquicos y de grandes empresarios, a la clase media acomodada y los universitarios, a grupos obreros de antigua tradición gremial y altos ingresos; y cuenta con el apoyo desembozado de Estados Unidos y de casi la totalidad de la prensa diaria. Sus consignas básicas son: la lucha contra el peronismo calificado de movimiento nazi, cuyas mejoras sociales son rechazadas como demagógicas; y la exaltación abstracta de la democracia, la libertad, la Constitución Nacional. El frente peronista se articula por medio de los aparatos burocráticos, militares, policiales y de la Iglesia, la nueva dirección sindical, y dos partidos creados en ese momento: el Partido Laborista y la Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical. Cuenta con el apoyo de los intereses británicos (colectividad local y embajada). Logra la adhesión de la clase obrera y de las masas pobres de las ciudades y el agro. Con abierto pero efectivo despliegue demagógico, su propaganda enfatiza las mejoras sociales a lograr, la lucha contra la oligarquía y contra el imperialismo yanqui, junto con la promesa de mantener el orden social y erigir una eficaz barrera contra el peligro comunista.

El 24 de febrero de 1946, en las elecciones más irreprochables que conociera el país hasta entonces, el excoronel, ahora general Perón, es elegido presidente de la República. Sus hombres de confianza controlan el Congreso Nacional, las gobernaciones y parlamentos provinciales y los órganos municipales; en suma, el aparato estatal a todos sus niveles.

El peronismo logra el control del Estado y ejerce sus poderes en condiciones iniciales muy favorables. Argentina dispone de un saldo positivo en el comercio exterior, y ha acumulado reservas de oro y divisas por 1 425 millones de dólares. La expansión simultánea del mercado mundial y del mercado interno, asegura a los grandes productores y empresarios altos precios y enormes ganancias. Esta coyuntura excepcional, la vigencia de condiciones de plena ocupación, inflación y prosperidad, posibilitan una política redistribucionista que no afecta sensiblemente a las grandes empresas. La influencia británica en Argentina se ha debilitado, sin que se produzca la irrupción inmediata de la influencia norteamericana. La vieja oligarquía está debili-

tada, aunque no destruida. La burguesía industrial, las clases medias en general, el proletariado y las masas populares, han aumentado en peso e influencia, pero carecen de ideología y política propias.

A consecuencia de todo ello, se produce un equilibrio fluctuante y precario entre los distintos grupos nacionales, y entre el país y las grandes potencias; y se crea una amplia base material de maniobra para el Estado. En estas condiciones, el grupo encaramado en el gobierno, que encabeza Perón, adquiere cierta independencia relativa frente a los distintos grupos nacionales y frente al sistema internacional, y despliega los caracteres de un *experimento bonapartista*. Se convierte en una especie de árbitro necesario, que decide los conflictos entre los distintos sectores e intereses actuantes en la sociedad argentina, y mantiene un equilibrio más o menos satisfactorio.

La estructura y la actuación del peronismo resultan, por lo mismo, fuertemente contradictorias. El peronismo surge y se desarrolla como representante del sistema social argentino, y de la burguesía argentina en general, y no de unos sectores exclusivamente. Esta representación se ejerce a través de una acción burocrática, que distancia e independiza parcial y momentáneamente al peronismo de los grupos dominantes en el país, y en virtud de lo cual aquél debe, en diversos momentos y ante distintos problemas, hacer una política nacional-burguesa aparentemente contra la voluntad de la propia oligarquía y de la burguesía industrial.

De todas maneras, la política peronista beneficia de diversos modos a los grupos superiores y élites económicas de Argentina. Perón y su equipo operan durante los primeros años en un clima de euforia económica. El país ha acumulado enormes recursos financieros y se espera un incremento indefinido de los mismos, como resultado del *boom* de posguerra, de las posibilidades de abastecer a los países hambreados y destruidos por la Segunda Guerra Mundial, y luego, también por la esperanza de un Plan Marshall para América Latina y de una tercera guerra en cuyo estallido Perón confía hasta el último momento de su gobierno. A través del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), el gobierno compra la producción primaria a precios fijos, y la vende a precios más altos en el mercado internacional, destinando las elevadas ganancias resultantes para financiar sus planes económicos, dar apoyo económico a las empresas nacionales y extranjeras, y subsidiar el consumo. La disponibilidad inicial de recursos permite además cumplir una serie de nacionalizaciones, y expandir el sector público. Son nacionalizados el Banco Cen-

tral, los ferrocarriles y gran parte de los servicios públicos. La deuda exterior se reduce considerablemente. La marina mercante y la aviación son desarrolladas. El sector público expandido asume tareas que las empresas privadas necesitan pero no quieren o no pueden asumir por sí mismas; y provee además al gobierno de resortes ampliados de poder y de recursos adicionales. El Banco de Crédito Industrial y otros entes financieros gubernamentales proveen de generoso apoyo a los grandes empresarios. La prosperidad general, la plena ocupación, el otorgamiento de altos salarios que, combinados con los subsidios, no elevan demasiado los precios ni afectan las ganancias de las empresas, la manipulación de los sindicatos estatizados, permiten crear y mantener un grado apreciable de paz social.

El gobierno peronista defiende así los intereses de la gran burguesía agro/industrial y financiera, pero limita su fuerza política y sus manifestaciones de independencia. Esta situación dual, la demagogia populista y el dirigismo del régimen, el costo excesivo de su mantenimiento, sus arbitrariedades y exacciones, impiden un pleno acuerdo entre los grupos sociales dominantes y el peronismo, mantienen un conflicto latente que se irá agudizando hasta estallar en la crisis final.

Por otra parte, el gobierno peronista debe tolerar o incluso estimular la irrupción de las masas trabajadoras en la vida social y política del país. El peronismo crea un poderoso aparato sindical y un plantel numeroso de dirigentes, cuadros medios y activistas. Impone el cumplimiento efectivo de una legislación laboral y previsional que se amplía de modo considerable en relación a la etapa anterior al triunfo del régimen. Son mejoradas las condiciones de ingreso, trabajo y vida de los trabajadores, sobre todo hasta 1949. Públicamente y bajo patrocinio estatal, se discuten los grandes problemas del país y del mundo. De modo demagógico se denuncia al imperialismo y a la oligarquía, y se exalta el papel del proletariado y del pueblo en general. Las masas trabajadoras toman una mayor conciencia de sus fuerzas, posibilidades y derechos, de su antagonismo con la clase empresarial, de la importancia de su propia organización como instrumento de lucha social y política. De manera vicaria y limitada, se sienten dueños del poder, protagonistas de una excitante aventura sin precedentes. La base popular es ampliada con el otorgamiento del voto femenino, el cual, combinado con manipulaciones y restricciones en las libertades públicas, otorga a Perón un triunfo aplastante en las elecciones de 1951, que abren su segundo periodo presidencial. Un papel decisivo es asumido por la esposa del presidente, Eva Perón. Plebeya advene-

diza, dinamizada por un hondo resentimiento de clase y por una ambición y una energía ilimitadas, toma a su cargo la relación con la clase obrera, especialmente sus mujeres, la dirección de la política sindical, y el montaje de un aparato especial para el otorgamiento de concesiones y prebendas.

3 REPRESIÓN, BUROCRATISMO E INEFICIENCIA

Como premisa y resultado a la vez de esta estrategia de arbitraje y equilibrio, el peronismo se encarama y se consolida en el poder. El triunfo y sobre todo la perduración requieren, sin embargo, un juego continuo de mecanismos e instrumentos, que se articulan finalmente en un aparato semitotalitario de captación, control y represión.

El peronismo presenta un perfil burocrático y contribuye a intensificar y acelerar la burocratización de la sociedad argentina. El equipo gobernante tiende a estructurarse y seleccionarse verticalmente, desde el líder hacia abajo. El sistema de reclutamiento aplica criterios, no de capacidad e integridad, sino según grado de lealtad hacia Perón, el aparato y los demás jefes. Se establece un verdadero "culto de la personalidad" hacia Perón, traducido en adhesión irracional a su persona, su política, sus decisiones. El monopolio de los medios de comunicación de masas, la imposición del contenido que deben transmitir los mismos, la restricción o la supresión de la prensa opositora, permiten desarrollar una propaganda totalitaria omnipresente. La misma se dedica simultáneamente a exaltar sin límites al líder y al régimen, y a difundir la "Doctrina Nacional Justicialista". Bajo este nombre aparece un conglomerado ideológico incoherente, en que se entrecruzan y colisionan elementos de filosofía tomista medioeval, falangismo español, principios de *Welfare State*, y la afirmación de una "tercera posición" en política internacional, en teoría hostil simultáneamente al capitalismo occidental y al comunismo soviético. Diversos grupos clericales y fuertemente conservadores reciben los puestos de control sobre el sistema educativo y la vida cultural, que caen así a bajísimos niveles, incongruentes con el grado de desarrollo social y de sofisticación intelectual de Argentina.

Como expresión y fundamento del sistema, son reformadas la Constitución nacional y la legislación vigentes. Ello busca sobre todo articular un formidable mecanismo represivo, que aplica un aparato policial y militar fuertemente reforzado, cuyos miembros reciben un trato privilegiado. La oposición política no es totalmente suprimida, pero su

representación formal en los órganos parlamentarios (nacionales, provinciales, municipales), es fuertemente restringida, lo que va acompañado de la indicada restricción a la libertad de expresión, y de persecuciones, encarcelamientos y atropellos de todo tipo.

El aparato totalitario es pieza clave para el logro de la creciente estatización del movimiento obrero. Los sindicatos y la Confederación General de Trabajo llegan a ser controlados y manejados por una burocracia de dirigentes serviles, que se transforman en estrato relativamente privilegiado de funcionarios estatales, a quienes se otorgan puestos y funciones en la administración pública, el parlamento y los cuerpos deliberativos provinciales y locales, así como subsidios gubernamentales, concesiones y posibilidades de enriquecimiento personal. La presión estatal se combina con la de las grandes empresas, para favorecer este tipo de liderazgo sindical, y desplazar a los auténticos militantes obreros. Los movimientos reivindicativos espontáneos (algunos de gran envergadura, como la huelga azucarera de 1949, y la huelga ferroviaria de 1951) son despiadadamente reprimidos. Toda veleidad de independencia por parte de los sindicatos y de la Confederación General del Trabajo son liquidados. Lo mismo ocurre con las pretensiones de autonomía por parte del Partido Laborista y de la Junta Reorganizadora de la Unión Cívica Radical, puntales políticos iniciales del peronismo, que son suprimidos y refundidos en el Partido Peronista Único. Todo confluye para fomentar en las bases obreras y populares una actitud pasiva y dependiente, que lo espera todo, no de la propia acción consciente y autónoma, sino de la concesión paternalista desde arriba. Se promueve asimismo en dichos sectores la renuncia de toda posibilidad de ideología propia y de un papel protagónico independiente en la vida social y política del país.

El peronismo resulta ser en definitiva un movimiento esencialmente conservador que como *El Gatopardo*, de Lampedusa, pretende que las cosas cambien lo mínimo para seguir siendo básicamente las mismas. El régimen despliega un respeto básico al orden social tradicional. El equipo gobernante se recluta en la gran burguesía, o en plebeyos arribistas que aspiran a integrarse en aquélla a través de sus funciones políticas y administrativas. Dirigentes y funcionarios resultan fácilmente corruptibles, complacientes hacia la oligarquía y la gran empresa nacional y extranjera, aunque cobrando el precio de esa buena voluntad en términos de privilegios, reciprocidad de favores y extorsiones ocasionales. El paternalismo autoritario, el manejo de la maquinaria totalitaria, independizan al equipo gobernante de toda forma efectiva

de control social y político. Esta situación, y la ideología incoherente, se traduce en programas de gobierno erráticos y contradictorios, y en una gestión caracterizada por la corrupción, el despilfarro, la improvisación, el aventurerismo, la ineficiencia, el desaprovechamiento de las posibilidades excepcionales con que se contó en el punto de partida.

La euforia inicial disimula en parte las limitaciones del régimen y sus consecuencias negativas. El desarrollo de la crisis económica y social las desnuda y agrava, convirtiéndolas en factores decisivos de la descomposición y del derrumbe final.

4 EL GIGANTE CON PIES DE BARRO

El gobierno peronista no ha modificado sustancialmente la estructura socioeconómica tradicional de Argentina. Carece de una estrategia deliberada y concreta de transformaciones económicas y sociales. Dos planes quinquenales que adopta sucesivamente, no pasan de ser recopilaciones de proyectos inconexos, más arma propagandística que instrumentos eficaces de modificaciones estructurales. La dependencia externa del país, en comercio e inversiones, respecto a Gran Bretaña y a Estados Unidos, es atenuada en aspectos laterales, mantenida y agravada en los niveles decisivos. El régimen agrario latifundista sigue intacto, salvo algunas restricciones en la comercialización exterior de los cereales (la de carnes sigue en manos de los frigoríficos extranjeros).

En materia de industrialización, desde 1946 a 1951 se pone el énfasis en la manufactura liviana. Desde 1952 se intenta resolver los problemas derivados de la falta de industria pesada, y del atraso en energía y combustibles, pero esta tentativa no tiene éxito. El peronismo no logra superar la situación de descapitalización económica generalizada, heredada de la preguerra y del periodo bélico de autosuficiencia forzada. Esta descapitalización se manifiesta en la insuficiencia y el desgaste del equipo industrial, agropecuario, energético y de transporte. El déficit de equipos es suplido por el creciente empleo de mano de obra, lo cual encarece los costos, reduce la productividad y, en condiciones de menor oferta para una demanda ampliada por la redistribución relativa del ingreso y el aumento de salarios nominales, agrava también la inflación.

La imposibilidad de capitalizarse surge de varios factores convergentes. El peronismo despilfarra locamente los recursos financieros y las divisas extranjeras. Estados Unidos vende a Argentina maquinaria

a precios altos, y compran productos argentinos en reducidas cantidades y a bajos precios; ejercen un *dumping* contra la producción agropecuaria argentina, y una estrategia de bloqueo financiero. La inconvertibilidad de la libra esterlina impide a Argentina compensar los saldos negativos con Estados Unidos mediante los saldos positivos obtenidos en Gran Bretaña. Los convenios bilaterales angloargentinos descapitalizan también a la economía argentina, al mismo tiempo que frenan la penetración de los intereses norteamericanos en el país. Los ingresos comerciales excepcionales desaparecen con la recuperación de Europa. La superproducción consiguiente, con el intervalo de una sequía desastrosa, contribuye a una grave caída en la balanza comercial y de pagos. El mercado interno se contrae, el desarrollo industrial se ve frenado, las quiebras empresariales y los índices de desocupación aumentan peligrosamente. El ente estatal que monopoliza el comercio exterior de cereales obtiene primero menos ganancias, y luego da pérdidas. Se ve obligado a comprar cosechas a un precio inferior al obtenible en el mercado internacional; no puede financiar otras actividades económicas, ni el presupuesto del Estado, y tampoco puede seguir pagando subsidios al consumo que posibiliten a la vez altos salarios y mayores ganancias. La consiguiente inflación afecta a las clases medias y populares de la ciudad y del campo. Los salarios nominales de los trabajadores son congelados, y descienden sus salarios reales y su participación en el ingreso nacional. Los índices del producto bruto, de la producción industrial y del capital, en los tres casos por habitante, permanecen en 1955 al mismo nivel que en 1948. La coyuntura favorable creada por la Guerra de Corea atenúa momentáneamente la crisis, pero ésta se agrava a partir de 1952.

Durante su segunda presidencia, inaugurada en 1951, el gobierno peronista parece emprender cada vez más claramente la retirada, en comparación con sus audacias y éxitos iniciales. El signo más claro al respecto es el cambio de actitud respecto a la empresa privada nacional y al capital extranjero. La gran empresa nacional combina frente al peronismo una actitud de oposición y de captación desde adentro, a través de sus organizaciones y hombres representativos. Entre la gran empresa y la jerarquía peronista se establece un esbozo de frente común contra las masas obreras y populares, manifestado en congelamiento de salarios y fuerte represión de los movimientos reivindicativos.

El gobierno peronista cambia también su actitud hacia las empresas extranjeras y las grandes potencias, evolución que coincide con un des-

plazamiento desde la órbita británica hacia la norteamericana. Ya en 1947, Argentina ha suscrito, bajo presión de Estados Unidos, el Tratado de Río de Janeiro, que contiene compromisos traducidos de hecho en un sometimiento político-militar. En 1950, Argentina obtiene del Export and Import Bank un crédito de 125 millones de dólares, contra el otorgamiento de concesiones onerosas. En 1953, la misión norteamericana presidida por el doctor Milton Eisenhower, fija las bases de un creciente entendimiento entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos. En el mismo año, una nueva Ley de inversiones extranjeras legaliza las posibilidades de un trato excepcionalmente favorable a las empresas no nacionales, prontamente seguido por concesiones a las empresas norteamericanas de automóviles y petróleo. La penetración de intereses norteamericanos en la economía argentina se vuelve cada vez más perceptible.

En aparente paradoja hacia la misma época empieza a tener éxito, por primera vez desde 1945, la constitución de un gran frente antiperonista. Varias circunstancias confluyen en tal sentido.

El peronismo ha sido defensor del orden existente en Argentina, y de los intereses del gran capital nativo y foráneo. En esa dinámica, sin embargo, ha debido tomar frecuentemente medidas no gratas para tales sectores. El peronismo sigue así siendo apoyado y tolerado por los estratos superiores de la sociedad argentina y por intereses extranjeros, mientras la situación económica sigue proporcionando recursos para cumplir una política de equilibrio y freno. La gradual desaparición de condiciones favorables multiplica y agrava las tensiones, los roces y los conflictos de todo tipo, rompe el equilibrio social y político, crea el peligro de un desborde de masas por encima de las estructuras defensivas del régimen. La acción del peronismo se vuelve así inútil y peligrosa, en la medida sobre todo en que, por sus compromisos sociales y políticos con sus propias bases, resiste volverse plenamente antipopular y demasiado complaciente hacia las grandes empresas nacionales y extranjeras.

Esta coyuntura crítica es percibida y asumida de manera en parte coincidente y en parte diferente por diversos sectores en presencia. Los grupos británicos están alarmados por la veloz irrupción norteamericana. Los grupos y gobierno de Estados Unidos desconfían de un liderazgo aventurero e irresponsable, y de un populismo de consecuencias imprevisibles, y preferirían un régimen menos autoritario y no tan comprometido con una base de masas, y por lo tanto más débil y manejable. La gran burguesía agroindustrial y financiera se resiente

por el peligro de masas y alto costo financiero y político de la burocracia peronista. Las clases medias se sienten afectadas a la vez por la inflación y los altos impuestos, por la irrupción de masas populares que ha reducido correlativamente el propio *status*, por la política cultural medievalista, y por unas concesiones al capital extranjero que afectan sentimientos nacionalistas a la vez difusos e intensos. De manera general para todos los grupos, el aparato totalitario del peronismo golpea e irrita ciegamente en todas direcciones, multiplica los atropellos y abusos, combina el clima de inseguridad generalizada con una corrupción ya indisimulable. Finalmente, la personalidad del general Perón parece sufrir un eclipse momentáneo, que se evidencia en la pérdida de energía e iniciativa, en la confusión de las decisiones, y en una cuasisenil debilidad por las diversiones de diversos tipos.

Las conspiraciones habían comenzado poco después del triunfo peronista en 1946, y la eclosión más importante se da con el frustrado levantamiento militar de 1951. El avance de la crisis económica y social les da nuevo impulso. El peronismo se mantiene todavía por el apoyo de las masas populares y del ejército, y por la falta de concreción de un sólido frente opositor. Las masas populares, sin embargo, han sido afectadas cada vez más por la crisis y la represión, se sienten vagamente desilusionadas respecto del régimen, mantienen una adhesión pasiva que resultará insuficiente en el momento del peligro. El ejército no ha podido menos que reflejar el impacto de las presiones provenientes de los distintos grupos sociales y políticos enrolados en la oposición. La división y lucha de facciones aparece en el seno del ejército, y también de la marina y de la aeronáutica. El conflicto con la Iglesia, que estalla en 1954, actúa a la vez como detonante y como eje organizativo de la conspiración antiperonista.

La Iglesia se ha beneficiado notablemente con el peronismo, que le ha proporcionado privilegios materiales de todo tipo, control sobre la educación y la cultura, influencia social y política. El malestar de la Iglesia hacia el régimen surge y se desarrolla por los aspectos populistas y demagógicos del peronismo, la competencia de idolatrías y lealtades que se establece inevitablemente entre ambas fuerzas. La organización de un pequeño partido demócrata cristiano bajo patrocinio de la Iglesia desencadena una colérica reacción de Perón, seguida de atropellos y humillaciones contra la jerarquía eclesiástica. La Iglesia asume el liderazgo de la conspiración, vuelca la adhesión de las fuerzas armadas, prepara el camino para la insurrección.

El 16 de junio de 1955, fracasa una primera intentona, que alcanza a bombardear la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo de Buenos Aires, con efectivos de aviación, y causa un considerable número de muertos. El ejército salva momentáneamente a Perón, pero rompe el equilibrio en su propio favor, convierte al gobierno en su prisionero, obliga al presidente a debilitar los controles sobre la vida política. Una última tentativa de Perón por recuperar la iniciativa y el control, amenazante para sus opositores, desencadena el segundo intento. El 16 de septiembre de 1955 surge un foco revolucionario militar en la ciudad de Córdoba, pocos días después apoyado por la flota de guerra. Perón conserva todavía el control del aparato militar y represivo, pero renuncia a utilizarlo enérgicamente, así como a movilizar a sus propias bases obreras y populares. Se entrega sin lucha y marcha hacia un exilio dorado y fastuoso, otorgado sucesivamente por tres dictadores: Stroessner, del Paraguay; Trujillo, de la República Dominicana; Franco, de España. Desde lejos sigue siendo un poderoso factor en la política de masas. Su movimiento, a través de vicisitudes y transformaciones de diversos tipos, ha contribuido a mantener a Argentina, hasta 1976 sobre todo en un estado de crisis política permanente, cuyo análisis exigiría un tratamiento por separado que excede el ámbito de este estudio.